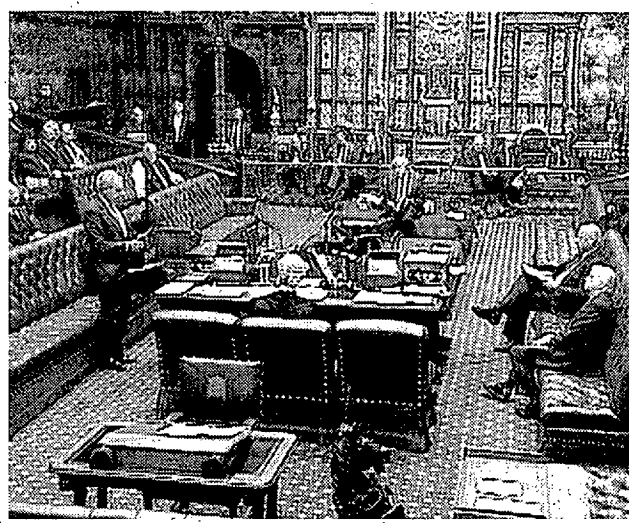


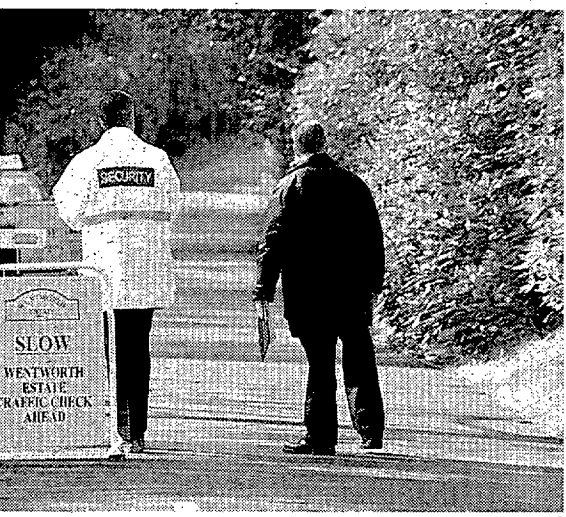
NO ARRESTO. Tras la detención en la clínica donde fue operado, permaneció en estado en el Grovelands Priory Hospital



ENFRENTAMIENTOS. Partidarios y detractores del ex dictador se manifestaban mientras la Cámara de los Lores se reunía



PRIMERA SENTENCIA. El 25 de noviembre de 1998, los lores se pronuncian contra la inmunidad. La sentencia fue anulada



EN LONDRES. Tras abandonar la clínica y ante lo prolongado del proceso, Pinochet se instala en una casa alquilada



SEGUNDA SENTENCIA. El 24 de marzo de 1999, los jueces lores fallan por segunda vez contra la inmunidad del dictador chileno



APOYOS. Tras conocerse la sentencia, la ex primera ministra británica Margaret Thatcher visitó a Pinochet en su casa



EXTRADICIÓN. El viernes, familiares de desaparecidos mostraron su alegría por la decisión de extradición de Pinochet

les en Chile para decirles que podían peligrar sus inversiones si no se liberaba a Pinochet.

Otros dos hitos en la guerra psicológica que se libró fueron el cambio del embajador en Madrid —se designó a Sergio Pizarro, quien inusualmente incluyó una visita protocolaria a la Fiscalía General del Estado— y el nombramiento de Patricio Aylwin como embajador plenipotenciario mientras viajaba hacia España. Aylwin, el primer presidente democrático de Chile después de la dictadura, expresó su intención de declarar contra Pinochet en Madrid, motivo por el cual se le revistió de fuero diplomático sobre la marcha para que no compareciera.

Un arbitraje imposible

La única evidencia de una maniobra concertada entre los gobiernos de Chile y España para sortear el proceso judicial se produjo el pasado verano, cuando el propio ministro español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, reconoció la posibilidad de acudir a un arbitraje internacional. Sin embargo, el revuelo causado por la noticia y la comprobación de que jurídicamente esta actuación era imposible hicieron desistir al Ejecutivo hispano de tal intención.

Pero el resultado final de todas estas iniciativas es que el proceso judicial se ha cumplido paso a paso inexorablemente. Ni las maniobras, ni las presiones psicológicas ni las veladas amenazas han servido de mucho. No impidieron que la Audiencia Nacional rechaza-

Hubo reuniones del canciller Valdés con empresarios españoles en Chile para decirles que podían peligrar sus inversiones si no se liberaba a Pinochet

Ni las maniobras ni las presiones psicológicas ni las veladas amenazas han influido en la Audiencia Nacional ni en los magistrados británicos

Familiares de las víctimas españolas se han quejado de que Abel Matutes se ocupaba más de la situación de Pinochet que de sus víctimas

En Chile, donde Pinochet era intocable, no ven imposible actuar contra él: se ha saltado una barrera psicológica; en un año se han amontonado 43 querrelas contra el dictador y sus adláteres

Sólo unos días antes de la detención de Pinochet era impensable que se pudiera procesar a cinco generales por su participación en la "caravana de la muerte"

zara todas las tesis de la fiscalía y se pronunciara por unanimidad sobre su competencia para juzgar a Pinochet, y no han influido en los jueces británicos, que ya han acumulado tres decisiones en este caso y todas en el mismo sentido.

Los representantes de las víctimas en España han lamentado que el Gobierno haya sido tímido en su proceder, y así lo expresó el letrado Manuel Murillo en una carta remitida el 19 de julio a la presidencia. En ella, familiares de las víctimas españolas se quejaban de que Abel Matutes se ocupaba más de la situación de Pinochet que del sufrimiento de los desaparecidos, y querían averiguar si se había entregado documentación del sumario a Chile de forma extraoficial. Pero lo cierto es que no puede achacarse al Ejecutivo español que no haya acatado la ley y no haya cumplido sus obligaciones.

Ha pasado un año desde que un papel firmado por el juez Garzón transformó a Pinochet en un hombre más, sometido al imperio de la ley. En doce meses las cosas han cambiado mucho, tanto que incluso en su país, donde era intocable e impune, no ven imposible actuar judicialmente contra él; se ha saltado una barrera psicológica. La prueba es que en un año se han amontonado 43 querrelas contra Pinochet y sus adláteres. Un juez, Juan Guzmán Tapia, al que se ha bautizado como "el Garzón chileno", ha dirigido las investigaciones, que acumulan ya 8.000 folios con descripciones sobre las atrocidades cometidas durante el tiempo del dictador.

Fruto de las pesquisas es el arresto al que han sido sometidos cinco de sus ex generales, principalmente por el caso que se ha conocido como "la caravana de la muerte", un siniestro recorrido por el país de un pelotón de soldados al mando de Arellano Stark y que dejaban a su paso un rastro de fusilados sin proceso. A estos cinco militares de alta graduación pueden unirse en breve otros tantos altos mandos del Ejército, actualmente en el punto de mira de la justicia chilena. Una situación impensable unos días antes de la detención de Pinochet.

En sólo un año, las cosas han cambiado mucho en Chile. Así lo cree Eduardo Contreras, el letrado que coordina buena parte de las acusaciones contra Pinochet: "La situación está bastante más despejada. Se ha visto que no ha pasado nada y hay bastante menos odio. El caso Pinochet ya no es un hecho esencial en mi país; a la gente le preocupa más la crisis económica o las elecciones presidenciales de diciembre. Un año después del arresto de Pinochet hay un hecho esencial en la vida de los

chilenos: se respira mucho mejor aire". Contreras no descarta la salida "humanitaria" para Pinochet, pero no le preocupa como antes: "aunque no hay condiciones políticas para juzgarle, si creo que podríamos procesarle".

Procesar a Pinochet era antes una idea descabellada en Chile. Realmente, el desencadenante de esta situación es la actuación del juez Garzón; una investigación que se inició en la primavera de 1996 y que fue acogida al principio con escepticismo y críticas.

Pinochet puede volver a Chile, pero lo haría mediante un procedimiento legal. Y allí deberá enfrentarse a un país que ya no es el mismo que dejó, tal como dice Eduardo Contreras. Una de las personas que más de cerca ha seguido el proceso es la diputada Isabel Allende. En conversación telefónica desde el Parlamento chileno, el mismo que cerró en su día Pinochet, la hija de Salvador Allende relató para qué ha servido todo esto: "Para colocar el tema de los derechos humanos en el centro del debate. Nuestro país ha estado siempre dividido porque no existía el convencimiento de que hubieron violaciones de los derechos humanos. Había impunidad, poca justicia y arrogancia; nunca existió la compasión. Ahora, en primer lugar, hemos dejado de esconder la basura bajo la alfombra".

La visión de Isabel Allende

La diputada socialista piensa que el país ha cambiado radicalmente a raíz de la detención. "Una encuesta reciente dice que un 70% de la población de Chile está a favor de juzgar a Pinochet, aunque sí es cierto que prefieren que el juicio se desarrolle aquí, en Chile. Pero eso era inimaginable un año atrás. Y ese es ahora nuestro gran examen pendiente: ver si los chilenos somos capaces de ejercer la justicia. Ha llegado el momento de cumplir las palabras: Pinochet deberá afrontar la justicia."

Isabel Allende no tiene constancia de maniobras extraprocesales del Gobierno español para solucionar el caso Pinochet ni cree que José María Aznar intente cualquier alternativa que se aparte lo más mínimo de la legalidad. Pero, al igual que Contreras, no se opone a la "salida humanitaria": "No nos preocupa que devuelvan a Pinochet a Chile por motivo de su salud. Nosotros sí tenemos humanidad". Una humanidad que Pinochet y los suyos no tuvieron con su familia: "A la hermana del presidente Allende, Laura, la detuvieron tras el golpe. Tenía cáncer. La metieron en prisión y la echaron del país. Murió. Ella nunca pudo volver".